

Editorial

¿Son históricas las elecciones de 1994?

Desde hace algún tiempo se ha vuelto moneda corriente afirmar que las elecciones de marzo de 1994 serán históricas; más popularmente se está diciendo que serán las elecciones del siglo. En realidad, todas las elecciones posteriores al golpe de Estado de 1979 (las de 1982, 1984, 1985, 1988, 1989 y 1991) han sido calificadas como históricas. El carácter histórico de estas elecciones vendría dado no sólo porque habrían consolidado progresivamente el proceso electoral, sino porque también habrían legitimado un ordenamiento político nuevo, de tal manera que fuera de él no cabe legitimidad alguna.

En la actualidad, el carácter histórico de las elecciones de marzo de 1994 vendría dado porque éstas pretenderían ser la culminación del proceso de paz, que arranca desde las negociaciones y pasa por la firma de los acuerdos, por el cese del enfrentamiento armado y por la incorporación civil y política del FMLN. Para el jefe ONUSAL, "la culminación exitosa del proceso de paz va a estar en una elección limpia y pura". Indudablemente, muchos piensan en estos términos y, en realidad, eso quisieran para dar por cerrada la experiencia salvadoreña.

En alguna medida, la realidad y el sentido de las próximas elecciones se remontan hasta las de 1982. A partir de entonces, cada evento electoral ha ido legitimando penosamente el nuevo ordenamiento político que culmina con la incorporación y la participación activa del FMLN. A lo largo de esa década de guerra y elecciones, de represión y reforma, el FMLN rechazó sistemáticamente el proceso electoral como instrumento para solventar los problemas del país e incluso boicoteó política y militarmente los eventos electorales. Pero ahora, el FMLN también acepta que fuera del juego electoral no hay legitimidad política.

Para desentrañar el significado y la importancia de las elecciones de 1994, más allá de los entusiasmos fáciles y de las interpretaciones superficiales, es necesario hacer algunas reflexiones sobre su verdadero

En este sentido, los acuerdos son más democráticos que las elecciones.

carácter histórico, preguntándose dónde radica en realidad su trascendencia.

1. Qué se puede esperar de las elecciones

Muchos piensan que el problema del país radica en el establecimiento de la institucionalidad democrática, entendida como una sucesión de gobiernos constitucionales, elegidos en comicios libres y limpios. Desde esta perspectiva, cada evento electoral es leído como la consolidación del proceso democrático. Por eso, quienes piensan en estos términos, buscan consolidar y legitimar el proceso electoral en sí mismo. Una vez concluido el evento electoral, el país cuenta con un gobierno elegido legítimamente y su población tiene la impresión de estar en una situación nueva, que permite la constitución de realidades sociales y políticas también nuevas. La democratización del país dependería casi exclusivamente de la continuidad ininterrumpida de los eventos electorales.

Para que estos eventos sean aceptables nacional e internacionalmente, las elecciones deben ser libres y limpias y sus resultados deben ser respetados. Dadas estas dos condiciones, la imagen democrática se vende bien, pues las apariencias están a su favor. No son muchos quienes intentan ir más allá de las apariencias siempre que se cumplan las formalidades mínimas de unas elecciones libres, no fraudulentas y cuyos resultados sean respetados al menos formalmente.

De hecho, las elecciones que desde 1982 jalonan el proceso salvadoreño han producido algunos bienes que es necesario reconocer. Entre los más importantes se encuentran los siguientes: en las elecciones vota más de un millón de ciudadanos; se ha hecho un esfuerzo serio, aunque insuficiente aún, para sanearlas, reduciendo cada vez más la posibilidad de fraude; han acrecentado la conciencia colectiva, especialmente en la Fuerza Armada, en cuanto a respetar formalmente el resultado de las urnas, dificultando el golpe de Estado; han ampliado la libertad de expresión y de organización, abriendo cada vez más el espacio político hasta incluir al FMLN; en teoría, ofrecen la posibilidad para rechazar a los legisladores y gobernantes que lo hacen mal y, o actúan en contra de los intereses de la mayoría; han dado cada vez más poder a los elegidos, en cuanto depositarios de un mandato popular, aunque éste es entendido y ejercido de manera presidencialista y verticalista, según las formas políticas tradicionales.

No hay por qué no esperar que las próximas elecciones acrecienten



estos bienes, pero en la medida en que lo hagan, no introducirán ninguna novedad mayor y, por lo tanto, estarán privadas de una de las características fundamentales de lo histórico. En la medida en que las próximas elecciones reproduzcan estos bienes ya logrados, tendrán más de consolidación de una tradición que de innovación histórica.

Ahora bien, con los bienes han venido algunos males, sobre todo al centrar la solución de los problemas nacionales en las elecciones y en los partidos políticos. Este espejismo ha encubierto e incluso ha empeorado algunas situaciones críticas. El pluralismo político irrestricto ha permitido la reaparición de personajes extremistas de derecha en el escenario político electoral. A algunos políticos y, o partidos pareciera importarles poco la situación de la mayor parte del pueblo, que ha llegado a niveles de pobreza nunca vistos cualitativa y cuantitativamente. Lo mismo debe decirse del cumplimiento de los compromisos de los acuerdos de paz, de la incertidumbre de que nada de lo conseguido está consolidado, sino que sigue estando a merced de la presencia verificadora y moderadora de ONUSAL, de la imposibilidad para llevar ante la justicia a los responsables de las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos durante los once años de guerra y de las que aún se siguen dando. El desprestigio de algunos partidos políticos tampoco puede obviarse, unos considerados corruptos e incompetentes, otros vinculados a los escuadrones de la muerte, a los secuestros, al militarismo y a la represión generalizada. Tampoco puede dejarse de lado el oportunismo político que les facilita el enriquecimiento ilícito desde el poder del Estado.

A veces, todo esto se ha disimulado e incluso ha sido promovido bajo la apariencia de sistema democrático, confundiendo democracia con el ejercicio periódico de elecciones libres y no fraudulentas. En la medida que las próximas elecciones reproduzcan estos males tampoco serán históricas, sino que simplemente darán continuidad a una práctica política ya establecida de democracia formal. Para evitar estos males sería necesario que los partidos políticos tradicionales revisasen sus prácticas, sus valores y su ideología y que promoviesen el surgimiento de dirigentes políticos formados en las nuevas realidades internacionales, regionales y nacionales, ajenos a los modelos y a las prácticas de la política criolla del pasado.

Sin desconocer la importancia institucional que las elecciones han tenido en sí mismas y para el proceso político en su conjunto, la trascendencia que pueda atribuírseles es limitada en cuanto que no resolvieron los problemas graves del país. Ciertamente, la solución del problema más urgente, la guerra, no provino de las elecciones, sino de un medio extraordinario, del diálogo-negociación. Las elecciones tampoco han resuelto, ni siquiera han mejorado sino que, al contrario, han empeorado—en cuanto llevaron al poder al partido responsable de la política económica de los últimos cuatro años— el problema más importante del país, la pobreza de la inmensa mayoría de los salvadoreños. En consecuencia, el carácter histórico de las elecciones de 1994 no puede derivarse de su continuidad con las elecciones del pasado, sino que habrá que buscarla en otro lado.

El alcance histórico de los eventos electorales es, en sí mismo y pese a las apariencias, bastante limitado, pues relega los problemas más importantes y urgentes del país. Las elecciones, y las de 1994 no serán la excepción, lo único que ponen en disputa es una cuota de poder que interesa mucho a los partidos políticos y a algunas fuerzas sociales. En efecto, las elecciones presidenciales dan cierto poder sobre la administración de la cosa pública, sobre recursos cuantiosos y sobre la posibilidad para adoptar medidas coyunturales importantes. Las de diputados pueden dar un mayor o menor poder en la asamblea para emitir o derogar leyes, para controlar el presupuesto, los préstamos y los tratados internacionales, para constituir el poder judicial, etc. Las de alcaldes dan un control importante sobre sectores sociales a nivel local y proporcionan una base de apoyo útil para fortalecer a los partidos políticos. Estas cuotas de poder no deben minusvalorarse. Por eso, los partidos políticos se afanan y consumen recursos enormes para tratar de llegar a esos lugares de poder, cuyo acceso sólo es posible por las elecciones.

Por lo general, los partidos políticos y algunas fuerzas sociales, una vez en posesión del poder del Estado, se dedican a promover y consoli-

dar sus intereses de clase. De ahí que para ellos sea fundamental ganar las elecciones. Es así como los intereses del gran capital, vinculados al proyecto neoliberal de ARENA (del cual son los beneficiarios casi exclusivos) y al origen del partido, quieren ganar las elecciones para continuar en el poder y desde él, seguir promoviendo sus intereses económicos y corregir aquello que, a su juicio, el gobierno de Cristiani ha hecho mal; en concreto, lo relacionado con la transformación del país derivada de los acuerdos de paz. Asimismo, ARENA busca retener la presidencia, la mayoría en la asamblea y las alcaldías más importantes para llevar a cabo sus planes de continuidad y corrección.

Mientras tanto, la izquierda, no obstante su división y sus vacilaciones, quiere ganar las elecciones para llevar a cabo las transformaciones políticas, económicas y sociales consagradas en los acuerdos de paz y para intentar suavizar los efectos negativos del modelo de ajuste estructural que sufre el país, ampliando y profundizando el gasto social del gobierno a partir de una reforma tributaria. Para la derecha, los componentes políticos, económicos y sociales de la democracia cristiana, de Convergencia Democrática y del FMLN serían catastróficos para el país.

Algunos ex altos oficiales de la Fuerza Armada también quieren ganar las elecciones para promover y reivindicar los intereses de la institución militar —severamente recortados, al menos formalmente, por los acuerdos de paz— desde la presidencia, la asamblea y las alcaldías. A este intento se ha sumado el sector más extremista de ARENA, descontento con la línea oficial del partido. El instrumento escogido para este propósito es el gastado Partido de Conciliación Nacional del cual estos ex militares ya se han apoderado. Depende de la cuota de poder que consigan en las elecciones podrán negociar con ARENA el reparto de los cargos de gobierno.

Los partidos pequeños nuevos de origen evangélico también buscan el poder para transformar el Estado y la sociedad, pero desde criterios morales, que consideran como los más eficaces para el bienestar del país.

En las elecciones de 1994, los partidos políticos buscan, primordialmente, acceder al poder. Entre más poder consigan, quedarán en una posición mejor para intentar alcanzar sus intereses. Esta es la vieja historia de las elecciones y, en este sentido, las elecciones de 1994 no ofrecen nada nuevo. Su importancia se reduce a llevar a cabo un evento electoral más, porque así lo establece la Constitución, con mayor libertad, con menos posibilidades de fraude, con más garantías en cuanto a respetar su resultado y con nuevos partidos.

En sentido estricto, lo histórico de las elecciones de 1994 radica en permitir al FMLN participar en el juego electoral e incluso en permitirle acceder al poder, si ganase, en unas condiciones "normales", pero sin cambios sustantivos en la realidad social del país. La normalidad de las condiciones en las cuales tendrán lugar las elecciones de 1994 viene dada por los cambios ocurridos en la superestructura en cuanto ya no hay guerra y en cuanto se han hecho algunas innovaciones en las áreas militar, policial, judicial y de derechos humanos, pero sin alterar en lo fundamental la estructura de poder.

Los partidos políticos esperan ganar las elecciones para acceder al poder, pero El Salvador no puede esperar mucho de ellas, dado que difícilmente contarán sus problemas más graves y por lo poco que se ha avanzado en la transición democrática exigida por los acuerdos de paz lo cual, además, aún es reversible —y hay quienes quieren el poder precisamente para revertir dicho proceso. La culminación exitosa del proceso de pacificación no radica únicamente en unas elecciones limpias y puras como algunos quisieran. El carácter histórico de las elecciones de 1994 está mucho más allá de la tesis de los demócratas electoralistas que identifican democracia con elecciones no fraudulentas.

2. Qué se debe esperar de las elecciones

Las elecciones de 1994 serán históricas si, en primer lugar, contribuyen a solucionar los grandes problemas del país o al menos se convierten en un inicio de solución, y si, en segundo lugar, son expresión cuantitativa de una voluntad popular consciente.

Por lo que toca a lo primero, de las elecciones de 1994 se debería esperar que consolidaran de manera irreversible los logros del proceso de pacificación y llevaran al cumplimiento cabal de los acuerdos de paz, que permitieran reducir de manera considerable la pobreza, que garantizaran los derechos humanos, que dieran paso a la reforma profunda del sistema judicial y del sistema político, que llevaran al sometimiento real del poder militar al poder civil, que restablecieran la confianza de la población en las instituciones y en la legalidad, etc. El que los partidos políticos sólo busquen una cuota de poder no exime a la sociedad civil para exigir la resolución de estos problemas.

En este sentido, habría que evitar que, pese a las estipulaciones del nuevo Código Electoral, el bombardeo intenso y nutrido de la propagan-

Las próximas elecciones serán históricas si la mayor parte de los votantes capta que algo importante puede cambiar para ellos, en particular, si los poderes reales pueden ser modificados o cambiados por medio del voto.

da electoral encubra estos problemas y aumente la confusión de la inmensa mayor parte del electorado que tiende a pensar que los males provienen de los candidatos y no de sus programas de gobierno. Dada la situación de transición en la que se encuentra El Salvador, los candidatos, por razones de ética política, debieran analizar ante la ciudadanía los problemas del país y discutir las soluciones que ofrecen.

De los candidatos de ARENA y del Partido de Conciliación Nacional



no se puede esperar que intenten seriamente resolver estos problemas. La primera respuesta que tienen para algunos de ellos es de carácter militar y autoritario. Ambos partidos quieren el poder para revertir los pocos logros conseguidos con los acuerdos, sobre todo aquellos que están orientados a transformar la estructura actual del mismo. Ninguno de ellos ha mostrado un interés genuino por aliviar la pobreza de la mayoría de los salvadoreños. La clase de candidato presidencial que estos partidos han seleccionado y, o impuesto confirma estas apreciaciones. El candidato de ARENA no promete mejorar la gestión del presidente Cristiani. Al contrario, representa al sector descontento del partido con la gestión demasiado "progresista" del gobierno actual. El candidato del Partido de Conciliación Nacional significa el retorno de los militares más derechistas a la política partidista.

El Partido Demócrata Cristiano se presenta con nuevas divisiones y con los mismos dirigentes, sólo que con cinco años más. La estructura interna del partido no ha promovido el surgimiento de dirigentes nuevos, de caras frescas con ideas renovadoras y dinámicas. El Movimiento Nacional Revolucionario sigue estando más preocupado por recuperar el lugar que sólo el Dr. Guillermo Ungo podía darle en el espectro político nacional y en los foros internacionales que por aportar soluciones a los problemas del país.

Convergencia Democrática y el FMLN son los que más garantías ofrecen en cuanto a ocuparse de los graves problemas nacionales; sin embargo, su aporte a su solución dependerá de qué pese más en su práctica política, si la búsqueda del poder o los intereses de las mayorías populares. No se debe dar por sentado que ambas cosas se identifican, porque las dinámicas son diferentes y, por lo tanto, también sus resultados. Para el bienestar de las mayorías populares no es suficiente que ambos institutos políticos participen en un evento electoral con garantías democráticas, sino que, además, es necesario que su práctica política introduzca una nueva dinámica para discutir abiertamente no sólo el reparto de una cuota de poder, sino quién hace el diagnóstico más objetivo de la realidad nacional, quién ofrece la mejor solución, quién tiene la mejor voluntad política y la mayor capacidad para actualizarla.

El segundo componente fundamental para poder hablar de unas elecciones históricas en El Salvador es que éstas expresen de modo adecuado una voluntad popular consciente. Para una parte importante de la población salvadoreña, las elecciones son un modo de participación y de expresión. No hay que olvidar que en El Salvador existe una cierta tradición electoral, reforzada por la alternabilidad en el poder: las elecciones al menos sirven para cambiar a los gobernantes y legisladores. Ne-

gar, obstaculizar o impedir la participación y la expresión de los salvadoreños, excluyéndolos del registro electoral es atentar contra esa tradición electoral y es poner en tela de juicio la limpieza y legitimidad de los próximos comicios.

Para que las elecciones de 1994 sean históricas, todos los ciudadanos calificados para votar deben poder hacerlo. De ahí que sea inadmisibles desde todo punto de vista que más de 700 mil ciudadanos con derecho al voto estén excluidos del registro electoral por la ineficiencia e incapacidad del Tribunal Supremo Electoral. Las dificultades técnicas del registro electoral que obedecen a los intereses políticos partidistas de los magistrados que integran dicho Tribunal, no deberían afectar el derecho a votar de un tercio de los ciudadanos capacitados para hacerlo. La deslegitimación de las próximas elecciones es inevitable si al menos los solicitantes legítimos no son inscritos en el registro, para no hablar de la necesidad de eliminar los duplicados y fallecidos (que representan más del 10 por ciento de los inscritos) y de depurar la información sobre miles de votantes (cuyos nombres no aparecen en las listas o están mal escritos o a quienes se les emitieron carnés defectuosos).

Para que las primeras elecciones de la postguerra reflejen cuantitativamente la voluntad popular, deberían superar con mucho el millón aproximado de salvadoreños que ha votado de manera consistente en los comicios que tuvieron lugar durante la guerra. Pero el Tribunal Supremo Electoral no está preparado para enfrentar este reto de las próximas elecciones. Las disputas políticas internas lo paralizan al extremo de no ser capaz de adoptar las decisiones más sencillas. Además, los intereses partidarios que predominan en su seno cuestionan gravemente la imparcialidad de esas decisiones. Muchos dudan de que el Tribunal tenga capacidad para registrar a los 700 mil salvadoreños excluidos del registro en la actualidad, pues ni siquiera ha podido cumplir con algunas de las disposiciones del Código Electoral (como la obligación de entregar a los solicitantes el carné electoral en un plazo de treinta días). Pese a la existencia de evidencia masiva de problemas de todo tipo, cuyo origen se remonta a los últimos eventos electorales, el máximo organismo electoral carece de información sistematizada sobre ello, a tal punto que ni siquiera conoce el grado de eficiencia de su propio registro.

En estas circunstancias, es inevitable que el Tribunal Supremo Electoral adolezca de las mismas deficiencias institucionales que los últimos consejos centrales de elecciones. Es decir, las reformas hechas a raíz de los acuerdos de paz no han producido los resultados esperados. El cambio de nombre de la instancia electoral máxima no ha implicado la transformación de su realidad institucional. El Tribunal Supremo Electoral, al igual que el antiguo Consejo Central de Elecciones, sigue con-

Para que las próximas elecciones puedan ser realmente históricas, deben colocarse en el contexto de los acuerdos de paz, del bienestar de las mayorías populares y de una participación mayor y más consciente de la población.

cebido como una institución que pertenece a los partidos políticos. El Tribunal está dirigido por cinco magistrados, quienes no sólo pertenecen a los cuatro partidos políticos más fuertes, sino que sus decisiones internas responden a criterios exclusivamente partidarios —es decir, primero se consulta al partido respectivo—, lo cual muy difícilmente contribuye a que esta instancia funcione con la eficiencia requerida. Y no puede ser de otra manera, puesto que los partidos son al mismo tiempo jueces y partes de una competencia por el poder.

Como los partidos de la oposición son los más interesados en la inclusión en el registro de todos los ciudadanos habilitados para votar, ARENA y sus aliados tienden a pensar equivocadamente que son votos contrarios y por ello no muestran mucho interés en resolver este problema. Esto indicaría que aún se teme la participación masiva de la población en las grandes decisiones nacionales como lo es la posibilidad para cambiar gobernantes y legisladores y para alterar el rumbo del país. El temor, aparte de reflejar lo poco democrática que es la derecha, es infundado, porque los votos de los más de 700 mil salvadoreños no inscritos en el registro no son automáticamente votos a favor de la oposición.

Los desafíos técnicos que enfrenta el Tribunal Supremo Electoral pueden resolverse en los próximos meses antes de las elecciones, si éste y los partidos trabajan unidos y de manera constructiva. Esto demanda buena fe, voluntad política y sentido común. La raíz del problema no está en los electores potenciales no inscritos todavía, sino en la constitución del Tribunal. Por lo tanto, obligar a los ciudadanos por una ley — que, además, tiene visos claros de inconstitucionalidad— a adquirir el carné no sólo no resuelve el problema fundamental, sino que es una muestra del desgaste de los partidos políticos que necesitan recurrir a medidas coactivas para que la población se registre. Por otro lado, cómo obligar a los ciudadanos a inscribirse cuando es notorio que el organismo encargado de ello no podrá hacerlo en el período establecido por la ley.

Si los problemas actuales del Tribunal Supremo Electoral no se resuelven, es inevitable el surgimiento de una crisis de confianza. Los partidos políticos no podrán engañar a los ciudadanos sobre las próximas elecciones. Es indispensable cambiar de rumbo pronto para no desaprovechar una oportunidad tan importante como ésta para generar confianza en uno de los procesos institucionales del país. De lo contra-

rio, el resultado de las elecciones permitirá un nuevo reparto del poder del Estado, pero éstas sólo tendrán la legitimidad que tenga el proceso.

Solamente si las elecciones enfrentan los problemas del país, si permiten la participación masiva de la población y si llegan a ser expresión de la voluntad de una ciudadanía consciente podrán contribuir a generar una dinámica nueva que pueda ampliar y tal vez transformar las estructuras tradicionales del poder dominante y, en esa medida, las elecciones serán históricas. Esto significa romper brechas en esos poderes y abrir espacios políticos de discusión, de concientización y de movilización para todos los sectores sociales de tal modo que, en las elecciones de 1994, la población participe más activa y conscientemente que en las del pasado, tenga la posibilidad real de dar un voto de castigo contra la corrupción y la ineptitud y establezca un precedente importante para que los políticos aprendan a tener más en cuenta la voluntad popular.

Si todo esto se llega a dar, las elecciones de 1994 desautorizarán desde la práctica la tesis de los electoralistas demócratas, quienes se conforman con la mera celebración del evento electoral, porque en él ven la solución de los problemas del país. Según ellos, sin elecciones libres no habría democracia y sólo habría democracia cuando hay elecciones no fraudulentas. Es importante desautorizar esta tesis porque, de acuerdo a sus principios, El Salvador sería un país fundamentalmente democrático, dado que ya se ha consolidado el proceso para alcanzar el poder por medio de elecciones libres y no fraudulentas, y porque ya no caben los golpes de Estado y menos aún los movimientos revolucionarios que pretenden alcanzar el poder recurriendo a la violencia armada. Por lo tanto, en lo fundamental, la democracia estaría lograda y establecida plena y totalmente. Pero la realidad demuestra lo contrario.

En las próximas elecciones es necesario superar la identificación del proceso electoral con el proceso democrático, ya que esa identificación representa un peligro grave de encubrimiento al ocultar los desafíos del país e incluso el reparto mismo de la cuota de poder que cualquier elección democrática implica. No olvidemos que en El Salvador, el poder militar está fuera de la competencia electoral y de sus resultados, cualesquiera que éstos sean, puesto que la Fuerza Armada goza de una autonomía institucional total. Todavía no ha llegado al poder un partido político o un presidente civil que efectivamente comande a la Fuerza Armada.

De ahí la importancia y la actualidad de los acuerdos de paz, que van más allá del mero evento electoral y de la repartición de una cuota de poder entre los ganadores. En este sentido, los acuerdos son más democráticos que las elecciones. Por lo tanto, las próximas elecciones representan una oportunidad para poner el proceso electoral al servicio

de la democratización de El Salvador y por eso mismo debiera evitarse que fuesen la mera reiteración de una práctica que ya ha dado de sí.

3. Una democracia electoral verdadera

Después de los acuerdos de paz, ya no es suficiente conformarse con los avances conseguidos en el área de las libertades democráticas a partir de los eventos electorales del pasado. Tampoco es suficiente la novedad que implica la ampliación de la oferta política con la participación directa de la antigua guerrilla en un evento electoral no fraudulento. La importancia histórica de las próximas elecciones no sólo estriba en la oportunidad para que el pueblo, por medio del voto, se dé a sí mismo los gobernantes y legisladores que quiere, sino que además y sobre todo deberían ser una oportunidad para transformar el país, modificando la estructura de poder en la línea marcada por los acuerdos de paz, empezando por las circunstancias en las cuales se desarrolla el juego electoral.

Las próximas elecciones serán históricas si la mayor parte de los votantes capta que algo importante puede cambiar para ellos, en particular, si los poderes reales pueden ser modificados o cambiados por medio del voto. De ahí la importancia de discutir ampliamente los proyectos y las plataformas políticas de los partidos, cuestionándolos a fondo. Ya es hora de que los partidos políticos muestren más madurez trasladando el centro de sus respectivas campañas electorales de los candidatos opositores y sus cualidades personales a su diagnóstico del país y sus propuestas de solución. Quienes están por el cambio y las transformaciones estructurales deberían hacer un esfuerzo supremo y volcarse para demostrar dónde radica la historicidad verdadera de las próximas elecciones.

En lugar de ataques personales e insultos, a los partidos políticos habría que exigirles propuestas concretas respecto a los planteamientos de los acuerdos de paz. Más aún, si las elecciones van a ser la culminación del proceso de pacificación, los acuerdos no deberían estar en juego, sino que, al contrario, todos los candidatos y sus partidos deberían comprometerse expresamente a cumplir todos aquellos compromisos que el gobierno de Cristiani ha dejado incompletos o postergados. Si la crisis más urgente del país pudo ser resuelta por medio de una negociación que puso fin a una guerra cruel y cruenta de once años, los partidos políticos deberían hacer un nuevo esfuerzo de concertación por el cual todos se comprometan a llevar hasta sus últimas consecuencias lo acordado por el gobierno y el FMLN.

Otro esfuerzo similar es necesario para garantizar a la población aquellos elementos mínimamente necesarios para vivir humana y digna-



mente. En El Salvador de hoy en día, la salud, la educación, la vivienda y el medio ambiente —por citar sólo lo más importante— de la mayoría de la población se encuentran en su punto más bajo por falta de financiamiento y de una dirección adecuada. Las graves deficiencias en estas áreas sociales constituyen el problema más importante del país en la actualidad, puesto que las condiciones mínimas necesarias para la vida humana no están garantizadas y porque su no garantía afecta a la mayoría de los salvadoreños. En consecuencia, los partidos políticos debieran hacer un esfuerzo enorme para, prescindiendo de ideologías e intereses particulares, garantizar a los salvadoreños esas condiciones de vida mínimamente humanas y dignas. Si fue posible concertar el final de la guerra, no es imposible concertar el bienestar de la población.

Los períodos presidenciales son demasiado breves como para poder resolver satisfactoriamente la falta de salud, de educación y de vivienda y el creciente deterioro ecológico. Estos graves problemas sociales exigen proyectos de gran envergadura y plazos largos, que no pueden estar sometidos a los vaivenes de los limitados intereses de los partidos políticos que llegan al poder. Esto exige mucha madurez y un compromiso real de los partidos con el bienestar de las mayorías populares. La sociedad civil, por su lado, tiene un papel clave, pues sólo ella podría conseguir que los partidos llegaran a concertar.

Esto último tiene importancia desde la perspectiva de la economía, porque contribuiría a reducir algunas de las incertidumbres que paralizan la inversión. Si el bienestar de las mayorías populares estuviera

zan la inversión. Si el bienestar de las mayorías populares estuviera asegurado y garantizado suficientemente, al producirse un cambio de gobierno no habría cambios bruscos ni sorprendidos, todos sabríamos a qué atenernos, en especial los inversionistas. En cambio, en la actualidad, cada nuevo evento electoral genera incertidumbres periódicas que no favorecen la planificación económica ni la inversión a mediano plazo.

Entonces, qué estaría en juego en los eventos electorales. Simplemente quién ejecutará las decisiones concertadas sobre los acuerdos de paz y el bienestar mínimamente digno y humano de la población. En este contexto, la campaña electoral debería estar orientada a ganarse la confianza de la población en cuanto a qué partido sería el mejor administrador de la cosa pública. Todavía estamos muy lejos de este ideal, en buena medida, por los intereses creados de los políticos y sus partidos. Las próximas elecciones podrían ser históricas si implicaran un paso firme en esta dirección.

Inexorablemente, este planteamiento cuestiona el sistema político actual, el cual necesita ser revisado y depurado a fondo. Hasta ahora sólo se ha remozado el mecanismo electoral y de manera insatisfactoria, a juzgar por sus primeras actuaciones. Esta necesidad de revisión y de reforma del sistema político es universal. Prácticamente, todos los sistemas y partidos políticos están en crisis, víctimas de la corrupción, la ineptitud y la indiferencia ante las necesidades más sentidas de la población. La crisis es universal, desde Italia a Japón, pasando por Venezuela, Brasil, Guatemala y, por supuesto, también El Salvador. Pero los partidos políticos salvadoreños se niegan a aceptar la crisis y, por lo mismo, se resisten a adoptar las medidas necesarias, pero su descrédito es inocultable y la necesidad de reformar el sistema político tradicional es insoslayable. Ni siquiera ARENA que se esfuerza por presentar una fachada de eficiencia y capacidad se escapa. En consecuencia, nadie debe extrañarse de la falta de motivación de los salvadoreños para registrarse ni de su cansancio y frustración ante la falta de credibilidad de la política, los políticos y sus partidos.

Las próximas elecciones representan una oportunidad única para construir un nuevo sistema político y, en este sentido, podrían también ser unas elecciones históricas. Para ello, todos los políticos y partidos deberían mostrar a la ciudadanía su honestidad así como su racionalidad y sensatez, concertando los dos puntos críticos de la realidad nacional: garantizar la transición democrática y hacer posible una convivencia mínimamente humana y digna. En esto, las fuerzas sociales tienen un papel importante e insoslayable, puesto que es muy poco probable que los partidos políticos den este paso por sí mismos. En las elecciones de

de esta concertación, dando su voto al candidato y, o partido que más garantías ofrezca en esta dirección. Esta tarea no es fácil y es compleja, por lo tanto, va más allá de las elecciones de 1994; sin embargo, esta coyuntura electoral podría convertirse en un buen comienzo.

Si las elecciones de 1994 no introducen transformaciones radicales en las estructuras sociales del país, en la población persistirá la percepción de que los medios ordinarios siguen siendo inútiles para hacer cambios importantes en El Salvador. Si se quieren cambios importantes, hay que recurrir a medios extraordinarios. De hecho, los pocos cambios importantes derivados de los acuerdos de paz se deben, en definitiva, al uso de medios extraordinarios. Más aún, la experiencia del proceso de pacificación demuestra que cuando se ha cumplido ha sido porque se ha recurrido a medios no ordinarios.

El obstáculo más importante que enfrentan las próximas elecciones para comenzar a revertir esta situación es la determinación del poder dominante para que aquéllas no introduzcan ninguna novedad y se limiten a un evento electoral más, lo suficientemente libre y no fraudulento como para poder venderlo nacional e internacionalmente como prueba de que El Salvador es un país donde la democracia se vive plenamente. En realidad, entre menos poder se ponga en juego en las elecciones, es más fácil respetar sus mecanismos legales y, por el otro lado, entre más poder se llegue a poner en juego, será más difícil engañar a la población.

El poder dominante teme y obstaculiza la participación masiva de la población. No quiere que ésta llegue a la convicción de que por medio de las elecciones se podría decidir algo más que quiénes serán los próximos gobernantes y legisladores. En una palabra, no quiere que la población tenga demasiada confianza ni quiere crearle muchas expectativas en las elecciones, sino que sólo se limite a depositar su voto por un candidato el día señalado, en un ambiente de fiesta cívica. En la práctica, esta falta de confianza en las instituciones del Estado es cultivada en todas las áreas de la vida social y es un medio eficaz para impedir la participación democrática real. Por eso, las elecciones de 1994 deberían, por un lado, coadyuvar a ir eliminando el miedo y el temor de la población, mientras que por el otro lado, le deberían generar confianza en la instituciones estatales y seguridad para reclamar sus derechos ciudadanos.

Los eventos electorales en sí mismos buenos y que traen bienes, reciben su realidad y significado últimos de la realidad y del proyecto global en el cual se inscriben. En consecuencia, para que las próximas elecciones puedan ser realmente históricas, deben colocarse en el contexto de los acuerdos de paz, del bienestar de las mayorías populares y

texto de los acuerdos de paz, del bienestar de las mayorías populares y de una participación mayor y más consciente de la población en los destinos de El Salvador. Entre más aproximen estas realidades, las elecciones de 1994 serán más democráticas e históricas.

San Salvador, 31 de agosto de 1993.

